

3000000- **# 92716**
Bogotá D.C., **26 MAYO 2015**

Señor

JAIR JOSE EBRATT DIAZ

Secretario General

Comisión Sexta Constitucional

CAMARA DE REPRESENTANTES

Carrera 7A # 8 - 68

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta comunicación radicado N° 87.431 de
2015, Proposición No. 34 Cuestionario Ministerio del Trabajo.

Respetado señor Secretario General:

En atención a la comunicación recibida con radicado del asunto y remitida por usted, nos permitimos dar respuesta del cuestionario en los siguientes términos:

1. En atención al numeral 1 del artículo 12 de la ley 1618 de 2013, ¿Qué mecanismos existen que favorezcan la formalización del empleo de las personas con discapacidad, así como programas de aseguramiento de riesgos laborales?

RESPUESTA. En cumplimiento del mandato constitucional, propuesto por el artículo 13 de la Carta de 1991, y desarrollado por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes instancias, ha fortalecido la protección de las personas puestas en condición de debilidad manifiesta, en general, y en relación con las personas con discapacidad, en particular.

Es así como se ha fortalecido el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control, en torno a la aplicación de la Ley 361 de 1997, particularmente en lo concerniente a la protección de la estabilidad reforzada de los trabajadores con discapacidad, así como desde lo normativo se contempla la expedición de decretos que establezcan, concretamente, en desarrollo de los postulados constitucionales, el régimen de protección dirigido a estas personas.

Por otra parte, en el ámbito de la promoción del empleo y de la ampliación de los programas que constituyen el esquema de protección social, el Ministerio, en colaboración con Colpensiones, ha puesto en marcha programas dirigidos a la población en general, que abarca, desde luego, a la población con discapacidad, tales como el establecido en los decretos 604 y 2983 de 2013, por medio de los cuales se establece el servicio social complementario de los beneficios económicos periódicos - BEPS.

Así mismo, y en orden a la generación de políticas de inclusión social, se contempla la participación de la población con discapacidad en los diferentes programas y proyectos de emprendimiento, de convertibilidad laboral, de formalización laboral y empresarial, y, en fin, en todos aquellos en los cuales se cuente con facultades de intervención y de gestión."

Otra de las medidas adoptadas y que favorecen esta población es el Mecanismo de Protección al Cesante que se implementó con la expedición de la Ley 1636 de junio de 2013, permite a las personas que pierdan su empleo, mitigar los efectos de esta situación, manteniendo el acceso a salud y el ahorro para su pensión, durante el periodo que esté sin empleo, el trabajador cesante podrá acceder a los servicios de intermediación y capacitación laboral, con el objetivo de ubicarse de nuevo laboralmente en el menor tiempo posible. Este sistema fomenta la formalización del trabajo y mantiene la calidad de vida del desempleado.

Igualmente se ha expedido el decreto 2852 del 06/12/2013 que reglamenta la prestación del Servicio Público de Empleo y se conforma la red de operadores del mismo. La función esencial del Servicio Público de Empleo es la de lograr la mejor organización posible del mercado de trabajo, para lo cual ayudará a los desempleados y a los trabajadores que quieran cambiar de empleo, a encontrar uno nuevo y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas, este servicio se presta a través de operadores de las cajas de compensación, personas jurídicas, alcaldías, gobernaciones y sena.

Adicionalmente, se crea la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo que tiene como misión administrar y Promocionar la Prestación del Servicio Público de Empleo, para hacer más eficiente el encuentro entre oferta y demanda de trabajo.

Los servicios prestados por los centros de empleo cuentan con los ajustes razonables para que la población con discapacidad, física, falta de visión y pérdida auditiva puedan acceder a ellos.

A continuación me permito relacionar los resultados de gestión alcanzados por el servicio público de empleo al cierre del año 2014:

Puntos de Atención: 414 distribuidos a nivel nacional

Puntos de Atención Privados: 233

Puntos de Atención Públicos: 181

Inscritos: 1.636.054 (personas inscritas en la página web de La Unidad del Servicio Público de Empleo.

Colocados: 270.014 (Número de personas colocadas en las vacantes registradas por los empresarios).

Empresas registradas: 118.000

Vacantes: 415.018

Fuente: Unidad del Servicio Público de Empleo.

Adicionalmente El Ministerio tiene en ejecución dos programas a los cuales puede acceder la población con discapacidad, estos programas son talentos para el empleo y 40000 primeros empleos, así mismo, el Gobierno en su búsqueda constante de soluciones y alternativas para combatir el desempleo y la falta de oportunidades, viene promoviendo de manera insistente la cultura del Emprendimiento. Es así, como ha elaborado distintas estrategias entre ellas el Fondo Empezar del Servicio Nacional de Aprendizaje y otras conducentes al fomento y apoyo de las micro pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Colombia, creando políticas, programas y proyectos de capacitación, asistencia técnica y asesorías.

En relación con la reglamentación del numeral 1 del artículo 12 de la Ley 1618 de 2013, se expidió el Decreto 723 de 2013, mediante el cual se establece de afiliación de los trabajadores independientes que cuentan con contrato, civil, comercial o administrativo, permitiéndole a las personas con discapacidad que en calidad de contratistas independientes cuenten con la cobertura en riesgos laborales, adicionales a la afiliación obligatoria como trabajadores dependientes en aquellos procesos de formalización de un vínculo laboral de acuerdo a la normativa vigente, al igual que el mecanismo de afiliación a través de entidades agrupadoras para trabajadores independientes.

2. Denotar los avances que de conformidad con el literal b del numeral 2 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, el Ministerio de Trabajo (sic) debe tener con respecto al programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad.

RESPUESTA. Con el propósito de difundir y promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo para la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, se han venido desarrollando dos actividades principales: 1. Sensibilizar a las empresas sobre la promoción del empleo de las personas con discapacidad y 2. El Teletrabajo como medida para facilitar el trabajo de las personas con discapacidad.

Acciones para sensibilizar a las empresas sobre la promoción del empleo de las personas con discapacidad

El Ministerio del Trabajo para sensibilizar a las empresas sobre el empleo de las personas con discapacidad, ha suscrito tres convenios con la Organización *Best Buddies* Colombia durante los años 2012 al 2014, por medio de los cuales se ha logrado la realización de 42 foros Regionales con empresarios para inclusión laboral de Personas con Discapacidad, que se efectuaron en las ciudades capitales de departamento y en la ciudad de Bogotá, con una participación de más 1.560 participantes; entre empresarios (1.083), actores sociales incluidos, Personas con Discapacidad, representantes de los gobiernos regionales y de instituciones de educación especial de las ciudades, funcionarios de la Agencias Públicas y Privadas de Empleo, Inspectores de Trabajo y funcionarios de las Direcciones Territoriales del Ministerio.

Los foros tienen como finalidad generar interés y sensibilizar a los empresarios sobre el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad, realizando una contextualización de la Discapacidad, la situación actual de la discapacidad en Colombia y el Proceso de Inclusión Laboral, en las empresas así como experiencias de inclusión en el cual participaron empresarios, Directores de Recursos Humanos y trabajadores con Discapacidad.

Por parte del Ministerio se hace la presentación de la situación actual en materia normativa y de los beneficios legales y tributarios establecidos en la legislación; Ley 361 de 1997 y Ley 1618 de 2013, mecanismos de contratación como el Teletrabajo que beneficia la vinculación laboral de personas con discapacidad entre otras poblaciones vulnerables.

Mediante encuesta aplicada a los empresarios asistentes a los eventos el 90% manifestó su intención de contratar personas con discapacidad (41% discapacidad física, 32% discapacidad intelectual, 19% discapacidad auditiva y 8% discapacidad visual).

Para la vigencia 2015, se tiene programado la realización de 13 foros y/o talleres sobre el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad en cada uno de las siguientes ciudades: Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, Cartagena, Manizales, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Valledupar, Mitú, Riohacha, Mosquera (Cundinamarca) y en Bogotá D.C., con la posible participación de 450 personas entre empresarios y actores sociales de la Política Pública de Discapacidad.

El Teletrabajo como medidas para facilitar el trabajo de las personas con discapacidad

El Teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo (1). El Teletrabajo se encuentra regulado en Colombia, a través de la Ley 1221 de 2008 y reglamentado por el Decreto 884 de 2012.

El Ministerio del Trabajo conjuntamente con el Ministerio de Tecnología y las Comunicaciones han realizado 65 talleres y eventos, con la participación de 3800 personas para sensibilizar a la población en general y contribuir en el proceso de inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, permitiendo aplicar la norma de tal manera que se garantice la igualdad de oportunidades laborales.

De igual forma con el propósito de promover la implementación del Teletrabajo se ha logrado la firma del Pacto por el Teletrabajo por 168 organizaciones públicas y privadas.

El Ministerio del Trabajo, ha elaborado dos guías de teletrabajo. Se encuentra la Guía Jurídica de Implementación del Teletrabajo, que acompaña a la entidad pública o privada en los aspectos jurídicos que debe observar al momento de la implementación, brindándole modelos de contratos, resoluciones, encuestas para aplicarlas en la organización.

¹ Artículo 2, Ley 1221 de 2008

Así mismo, se encuentra la Guía Técnica de Prevención de Riesgos Laborales en el Teletrabajo, que fue elaborada con ayuda de las administradoras de riesgos laborales, y brindan un apoyo en materia de riesgos laborales en el teletrabajo. Se puede consultar la página de esta entidad en www.teletrabajo.gov.co en donde encontrará el ABC del Teletrabajo.

Participación del Ministerio del trabajo en el Programa "Pacto de Productividad" en la inclusión laboral de personas con discapacidad

El Ministerio del Trabajo ha formado parte del Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con discapacidad "Pacto de Productividad", que surge como respuesta a la exclusión en el ámbito laboral de las Personas con Discapacidad, proponiendo un abordaje innovador frente a la problemática de inclusión laboral de dicha población y generando cambios significativos en los imaginarios sociales frente a la capacidad laboral de las Personas con discapacidad, tanto en empresarios, funcionarios de entidades de inclusión laboral públicas y privadas, como en las mismas Personas con discapacidad, sus familias y movimientos asociativos.

El Programa "Pacto de Productividad" ha contribuido de manera representativa y pertinente a la generación de insumos y análisis requeridos para el diseño de lineamientos técnicos, estándares y políticas públicas relacionadas con la inclusión laboral, en temas como el desarrollo de la intermediación laboral inclusiva, la formación para el trabajo y la construcción de manera participativa, de un Modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad, el cual se desarrolló en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.

En el año 2013 el Programa "Pacto de Productividad", en convenio con el Ministerio del Trabajo, realizó un estudio de análisis relacionado con las barreras normativas que tiene el país, en materia de vinculación laboral, estabilidad laboral, pensiones y ajustes razonables para esta población.

El Programa Pacto de Productividad, durante su tiempo de ejecución ha contribuido, a la concientización de más de 1.500 empresas sobre la importancia de la inclusión laboral, identificó, asesoró y movilizó a 192 empresas, quienes generaron 721 oportunidades de vinculación al medio empresarial, entre contratos de aprendizaje y contratos de trabajo. Asesoró los procesos de formación para el trabajo de 1.116 personas con discapacidad y acompañó durante 5 años al SENA para la cualificación de sus servicios y el diseño de su Política institucional de

Atención a Personas con discapacidad. Se formula la política institucional de atención a personas con discapacidad, estipulada en la resolución 1726 de 2014, a partir de la cual se establecerá la agenda de preparación de los servicios que prestan los centros de formación y la agencia pública de empleo del SENA, a nivel nacional para que sean inclusivos.

El programa **SENA Incluyente**, que tiene como objetivo brindar oportunidades para que las personas con discapacidad tengan acceso a los programas de formación y los demás servicios en igualdad de condiciones, garantizando los ajustes razonables necesarios para lograr una verdadera inclusión en la formación y a través de Agencia Pública de Empleo, con el fin realizar promoción laboral que permita identificar oportunidades para la vinculación laboral de la población.

A través de este programa entre el 2013 y 2014 el SENA ha beneficiado a **43.359** colombianos con discapacidad en formación para el trabajo, de los cuales 4.920 en cursos de formación titilada, **39.439** recibieron orientación ocupacional en cursos complementarios, y **3.938** han obtenido oportunidades laborales.

3. En atención al literal d del numeral 2 del artículo 13° de la ley 1618 de 2013, el Ministerio prestaría fortalecimiento a las unidades productivas de las personas con discapacidad, a través de la capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito con baja tasa de interés, apoyo con TIC's, diseño de páginas web para la difusión de sus productos, etc. ¿Qué resultados permiten demostrar la tarea cumplida por parte del Ministerio de Trabajo (sic)?

RESPUESTA. El SENA desarrolla programas dirigidos a la población con discapacidad, donde busca generar una cultura de emprendimiento para contribuir con el crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial, la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad nacional, la inserción laboral de los desempleados y generar información sobre el mercado laboral y el empleo. Dentro de los programas se encuentran las acciones financiadas por el Fondo Emprender, cuenta adscrita al SENA, con el objetivo de facilitar la creación de empresas, que surjan a partir de la asociación de aprendices, practicantes y profesionales recién egresados, con la entrega de recursos financieros (capital semilla). Para las personas con discapacidad que están en procesos de formación técnica de esta entidad se creó una línea diferencial.

Mediante la Circular externa N° 005 de 22 de abril de 2013 el Banco de Comercio Exterior de Colombia -Bancoldex abrió un cupo de diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000.00) para apoyar el Desarrollo Empresarial, dirigida a las entidades del sistema bancario y financiero, referente a la apertura de la Línea de Crédito para empresas de personas con discapacidad, de cualquier tamaño y sector, a excepción del sector agropecuario; así mismo para personas jurídicas en cuyo capital social las personas con discapacidad tengan una participación igual o superior al 20%. Los recursos pueden destinarse a capital de trabajo (materia prima, insumos, inventarios y demás gastos operativos de funcionamiento); modernización (compra o arrendamiento de bienes inmuebles, maquinaria, equipos y/o vehículos vinculados a la actividad económica), adecuaciones o mejoras de las instalaciones y locales comerciales, así como certificaciones de calidad, licencias, patentes, registros sanitarios, tecnologías de información y demás activos fijos

Adicionalmente, el Fondo Emprender realiza convocatorias específicas para población en condición de discapacidad. Es el caso de la convocatoria No. 27 de 2012 que contó con un presupuesto asignado de dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000) cuyo objetivo consistió en financiar iniciativas empresariales que sean presentadas por personas con discapacidad certificadas por el prestador de servicios de salud e identificada y canalizada a través del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad.

El convenio suscrito entre el SENA, el Instituto Nacional para Ciegos INCI y la Fundación Once de América Latina -FOAL denominado Programa Ágora (Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina), es desarrollado por la Fundación ONCE para América Latina (Organización Nacional de Ciegos Españoles) para la población con discapacidad visual de América Latina; es de carácter internacional y tiene presencia en varios países de América Latina en los que se encuentra: Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Perú, Panamá, Nicaragua, El salvador; Paraguay, México, República Dominicana, Bolivia y Colombia.

AGORA tiene como objetivo fundamental mejorar la empleabilidad y productividad de la población con discapacidad visual, a través de acciones de orientación ocupacional, formación, intermediación laboral, promoción laboral y apoyo a iniciativas productivas. En Colombia se desarrolla gracias a alianzas entre el Servicio Nacional de aprendizaje SENA y el Instituto Nacional para Ciegos INCI, en 21 regiones del país, con proyección para que en el 2015 haya presencia en la totalidad de las Regionales del SENA.

Resultados:

Personas formadas	3.335 personas ciegas y con baja visión
Emprendimientos	800 microemprendimientos
Inclusión laboral	220 personas ciegas y con baja visión irreversible y 16 con contrato de aprendizaje
	425 empresas visitadas para promoción laboral
	112 adaptaciones de puestos de trabajo en empresas con tecnología accesible tiflotécnica
Funcionarios SENA capacitados	717 funcionarios SENA administrativos e instructores capacitados en abordaje y estrategias pedagógicas y uso de tecnología accesible.
Ajustes programas	143 cursos con Ajustes Razonables – Metodológicos Implementados
Herramientas	Un kit de herramientas abordaje, orientación y promoción laboral de personas con discapacidad.
Accesibilidad	Dotación de 20 Regionales con Tiflotecnología (impresoras braille, scanner, grabadoras, magnificadores de pantalla, software Fine Reader, memorias USB etc.)

Es importante mencionar que el marco jurídico internacional de discapacidad ha tenido una importante evolución, desde la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, hasta la promulgación de otras declaraciones y principios en esta materia. En el caso de Colombia, la Constitución Política de 1991, desde el modelo de Estado Social de Derecho, consagra los derechos de las PcD y garantiza su protección especial en el artículo 13, imparte las directrices para adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social en el artículo 47, señala la obligatoriedad del Estado en la formación e inclusión laboral de las PcD en el artículo 54 y garantiza su educación en el artículo 68.

Así mismo, Colombia incorpora al bloque de constitucionalidad los avances del Derecho Internacional, como la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las PcD -Ley 762 del 2002-, y la Convención sobre los derechos de las PcD de Naciones Unidas -Ley 1346 del 2009-. Este marco jurídico internacional y constitucional ha generado un amplio desarrollo legal y jurisprudencial sobre la obligatoriedad del Estado de reconocer y aplicar estos derechos. Sobresalen en el marco normativo nacional la Ley 361 de 1997 que

establece mecanismos de integración de las personas con limitación, Ley 1145 de 2007 y la Ley estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

De acuerdo con el CONPES 166 de 2013 en la estrategia para generar y fortalecer las capacidades humanas de las PcD, sus familias y cuidadores, y la equiparación de oportunidades para el desarrollo y participación en todos sus ámbitos en materia de inserción laboral de las PcD, se definirán los mecanismos para el acompañamiento en la fase inicial de inserción laboral y para el acceso a la formación para el trabajo de jóvenes adultos con discapacidad.

Igualmente se diseñará e implementará un programa de formación y cualificación para cuidadores. Dado que la Política Pública de Discapacidad contempla acciones para cuidadores, que en su mayoría son familiares de la PcD y que al dedicarse al cuidado de esta población no logran insertarse al circuito económico, la PPDIS busca opciones productivas para ellos, sin detrimento de su rol de cuidador, rol que también debe cualificarse. Así mismo, se promoverá la participación de las PcD en convocatorias del Fondo Emprender y unidades de emprendimiento.

En tanto la política de inclusión laboral, es preciso resaltar que hace parte de la Política de Trabajo Digno y Decente, que promueve oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana (OIT, 1999) y tiene como objetivos estratégicos (i) la creación de empleo (ii) la protección del empleo (iii) extensión de la protección laboral y (iv) el diálogo social.

El Ministerio del Trabajo, al tenor de lo señalado en el Decreto 4108 del 2 de noviembre de 2011, estipula en su artículo 1º como objetivos del mismo: "(...) la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales.

Fomentando así, el Ministerio del Trabajo políticas y estrategias para la generación de empleo estable, la formalización laboral, la protección a

los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. La protección a los derechos de población vulnerable, en este caso la población con discapacidad.

4. En atención al literal e del numeral 2 del artículo 13° de la ley 1618 de 2013, ¿Cuál es la situación actual en cuanto al desarrollo de negocios inclusivos y el fortalecimiento del emprendimiento y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y superación de la población con discapacidad?

RESPUESTA. El Ministerio, siguiendo con su política de apoyo a la población en condición de discapacidad, promovió a través del fondo emprender la convocatoria nacional No. 027, que se cerró en el año 2013 y cuyo objeto es financiar iniciativas empresariales que sean presentadas por personas con discapacidad certificadas por el prestador de servicios de salud e identificada y canalizada a través del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, que tengan calidad de aprendices, egresados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o que se encuentren cursando especialización, maestría y/o doctorado, así como egresados de estos programas, que hayan culminado y obtenido el título dentro de los últimos 60 meses y cuya formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones reconocidas por el estado.

Dicha Convocatoria fue presentada y aprobada por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA bajo Acta 1462 del 6 de septiembre de 2012 con recursos por \$2.000.000.000 (Dos mil millones de pesos), y su apertura oficial se llevó a cabo el 12 de diciembre de 2012 a las 8 a.m. con 4 cierres durante el año 2013, con fecha de primer cierre el 1° de Marzo de 2013 y finalizando con el cuarto cierre el 29 de noviembre de 2013, arrojando los siguientes resultados:

En total se presentaron 16 planes de negocios de los cuales se aprobaron 7 planes con recursos del Fondo Emprender por valor de \$503.796.300 (Quinientos tres millones setecientos noventa y seis mil trescientos pesos). Los 7 planes de negocios ya se convirtieron en empresas legalmente constituidas y se encuentran en su etapa de ejecución, con el respectivo acompañamiento de las unidades de emprendimiento SENA y la interventoría asignada.

5. El literal f del numeral 2 del artículo 13° de la ley 1618 de 2013 expresa que el Ministerio de Trabajo (sic) junto al

Departamento Administrativo de la Función Pública, asegurarán que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado, vinculará un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos existentes. ¿Cuál es el porcentaje establecido? ¿Se cumple en las entidades del Estado? ¿Cuál es el Decreto reglamentario correspondiente?

RESPUESTA. El Ministerio del Trabajo, desde principios de 2014, ha venido realizando reuniones conjuntas entre el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y el Ministerio del Trabajo, contando con participación del INCI y el INSOR con el propósito de concertar el proceso y llevar a cabo la conceptualización del tema de cuotas, porcentajes o reservas de cargos para vinculación de poblaciones vulnerables y la Jurisprudencia que en la materia existe, así como una revisión de las experiencias internacionales y nacionales en la vinculación de personas con discapacidad en el sector público.

Por disposición de este Ministerio, se decide presentar un proyecto de ley al Congreso de la República en la legislatura de 2014, para modificar la Ley 581 de 2000 conocida como la Ley de cuotas, cuya finalidad es definir los mecanismos para que las autoridades, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, le den a la mujer, a la población afro descendiente, raizal, palenquera, negra, indígena, ROM y a las personas con discapacidad la adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, incluidas las entidades a que se refiere el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia y además promuevan esa participación en las instancias de decisión de la sociedad civil.

El objeto de presentar este proyecto de ley era fijar una única norma de cuotas para las poblaciones vulnerables y no fijar cuotas en distintas normas sin una coherencia o con la articulación requerida.

Acogiendo las conclusiones presentadas por el Honorable Senado de la República en el debate de control político sobre el tema de discapacidad el pasado mes de noviembre de 2014, las recomendaciones del estudio realizado por el Programa Pacto de Productividad sobre las barreras normativas que afectan la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Colombia, y acogiendo la directiva presidencial sobre racionalización en la expedición de decretos, este Ministerio considera la necesidad de tramitar la expedición de un decreto reglamentario de las leyes 361 de 1997 y la Ley estatutaria 1618 de 2013 sobre los procesos

de inclusión laboral de Personas con Discapacidad – PcD y de la estabilidad laboral reforzada.

El Ministerio del Trabajo con el apoyo de EUROSOCIAL, viene adelantando el proceso de reglamentación de la Ley 1618 de 2013 y la Ley 361 de 1997, mediante la expedición de un Decreto Reglamentario respecto a los procesos de inclusión laboral de Personas con Discapacidad – PcD y de la estabilidad laboral reforzada, para el cual se han priorizado los siguientes temas: Un primer capítulo sobre Vinculación laboral de Personas con Discapacidad - PcD: Definiciones, **Cuota o porcentaje de vinculación de PcD en el sector público**, Certificación (EPS), Calificación, casos excepcionales existentes, o las que expida la junta, Acceso al servicio público, Beneficios legales y tributarios, ajustes razonables y adecuaciones. Un segundo capítulo sobre Desvinculación o terminación del contrato: Retiro voluntario, Terminación del contrato por justa causa, Por Mutuo acuerdo, Terminación del contrato sin justa causa: incompatibilidad por el tipo de discapacidad, Autorización de despido con indemnización: reubicación, rehabilitación, reconversión. * En los dos casos, se realizará el proceso, previa autorización del Inspector de Trabajo, y reglamentación de la estabilidad laboral reforzada para Personas con Discapacidad, y del procedimiento por parte del Ministerio del Trabajo. (Art. 26, Ley 361 de 1997).

El compromiso de colaboración de Eurosocio a la solicitud realizada por el Despacho del señor Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección realizada el 18 de febrero de 2015, donde se requirió el apoyo y asesoría del programa de la Unión Europea Eurosocio II al proceso de reglamentación; dicha solicitud fue aceptada y formalizada por Eurosocio mediante oficio del 16 de marzo de 2015 suscrito por Francesco Maria Chiodi Coordinador del Área de Protección Social, empleo y educación.

Luego se han efectuado reuniones los días 23 de marzo y 14 de abril del presente con el Presidente el Consejo Nacional de Discapacidad Asesor Presidencial del Plan Presidencial de inclusión de las Personas con Discapacidad Doctor Juan Pablo Salazar, quien ha manifestado el interés de acompañar el proceso, de reglamentación y socialización en las actividades y eventos organizados entre el Ministerio de Trabajo y Eurosocio.

Para efectos de la socialización del proyecto de decreto se han convocado a : Las Organizaciones de y para Personas con Discapacidad, Gremios y Empresarios, Entes territoriales, Organizaciones Sindicales,

Juristas y representantes de las altas Cortes e representantes del Sistema Nacional de Discapacidad (CND, GES, CDD Y CMD), se tiene programada la realización de los siguientes eventos:

EVENTO	CIUDAD	FECHA
Socialización interna - Mintrabajo	Bogotá	4 de mayo de 2015
Mesa de Trabajo	Bogotá D.C.	6 de mayo de 2015
Mesa de Trabajo	Cali	12 de mayo de 2015
Mesa de Trabajo	Medellín	21 de mayo de 2015
Mesa de Trabajo	Cartagena	28 de mayo de 2015
Mesa de Trabajo	Bucaramanga	1 junio de 2015

6. El numeral 5 del artículo 30 de la ley 1618 de 2013, también se establece (sic) que en el período de un año contado a partir de la promulgación de esta ley, el Gobierno Nacional con la participación de las personas en situación de discapacidad y sus organizaciones, preparará una evaluación de impacto de las medidas adoptadas mediante esta ley en el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad que deberá presentar ante el Congreso de la República y difundir de manera amplia. Los resultados de la evaluación serán incluidos en el informe periódico que el Estado colombiano deba presentar ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Dónde está dicha evaluación? ¿Cuál es? ¿Bajo qué metodología se diseñó? ¿Existe? De no ser así, explicar el por qué si ya ha transcurrido más de un año desde el momento de la promulgación de la Ley.

RESPUESTA. Atendiendo su solicitud le reenviaremos la respuesta dada por parte del Ministerio de Salud y Protección Social como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad el primer Informe del Estado Colombiano frente a la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En el documento que puede ser adjunta y que puede ser consultado en el siguiente enlace <http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Informe%20Estado%20Colombiano%20Implementacion%20CDPD.pdf> se citan las medidas legislativas, las acciones emprendidas por los diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil, así como las limitaciones, las medidas correctivas y las proyecciones en algunos campos. Los recursos destinados para la adopción de las diferentes medidas se citan al final del documento agregados por cada uno de los artículos.

Para la elaboración del informe se consultó un amplio número de instituciones que conforman el Estado colombiano entre ellas al Ministerio del Trabajo, organizaciones de y para personas con discapacidad y representantes de la sociedad civil. Podemos mencionar el Consejo Nacional de Discapacidad -CND, el Grupo de Enlace Sectorial -GES y otras instancias de nivel nacional no partícipes de forma directa del Sistema Nacional de Discapacidad como el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia -INPEC, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -ICETEX, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS. Adicionalmente se consultaron entidades públicas de orden departamental, distrital y municipal. La recopilación de la información se realizó por medio de diferentes mecanismos que incluyeron reuniones formales, teleconferencias, procesos de consulta y formularios en línea, entre otros. Las consultas en línea se hicieron a través de documentos electrónicos accesibles para personas con discapacidad.

El documento fue elaborado por todas las entidades de Gobierno Nacional en el marco del Grupo de Enlace Sectorial, contó con la participación de los Consejeros Nacionales de Discapacidad en representación de la sociedad civil y el apoyo del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -PAIIS de la Universidad de los Andes. El informe ya compilado y revisado es enviado por el Ministerio de Salud y Protección Social a la Cancillería quien lo deposita formalmente ante Naciones Unidas, a través de la Misión en Nueva York.

Este informe constituye la línea de base para el país en función de las medidas de inclusión, acción afirmativa y ajustes razonables para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en armonía con las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los

derechos de las personas con discapacidad, aprobada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, sobre la cual se desarrollan las disposiciones de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Las evaluaciones que se desarrollen con posterioridad a este informe considerarán esta línea de base como punto de referencia para la medición del impacto de las medidas establecidas en la Ley

Cabe precisar que frente a este informe aún no se ha recibido retroalimentación por parte del Comité por los Derechos de las Personas con Discapacidad – CEDDIS de la ONU y que al mismo aplican procesos de actualización de la información que serán coordinados desde el Consejo Nacional de Discapacidad bajo las orientaciones que el CEDDIS remita a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Por su parte, el artículo 26 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 determina:

ARTICULO 26. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. El Consejo Nacional de Discapacidad, evaluará cada 4 años la eficacia de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a la discriminación, como mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Esta evaluación se realizará para establecer si se han alcanzado los objetivos buscados con la aplicación de la presente ley, en los diferentes escenarios de planificación y toma de decisiones sobre las acciones que se diseñen para mejorar sus condiciones de vida. Tal evaluación no suplirá el control y la evaluación que deben realizar los organismos de control del Estado colombiano competentes.

Si bien el período de evaluación de que trata el artículo 26 aún no se ha cumplido, desde el Sistema Nacional de Discapacidad, y en particular desde el Consejo Nacional de Discapacidad se han definido varios mecanismos para el seguimiento y monitoreo del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellos:

- **Observatorio Nacional de Discapacidad OND**, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social, con participación de diferentes sectores, es una estrategia técnica que recopila, investiga, analiza y genera información, para contribuir al seguimiento de los planes, programas, estrategias, proyectos y acciones de responsabilidad de diferentes actores en función de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. El

OND pone al servicio de las personas con discapacidad, administraciones territoriales, el sector académico, actores sociales e institucionales la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Observatorio puede ser consultado a través del siguiente enlace:
<http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Home.aspx>

• **Tablero de Control de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS y el Conpes Social 166 de 2013.**

El Departamento Nacional de Planeación, los entes coordinadores de política y los diferentes Ministerios y Departamentos Administrativos, cuentan con un portafolio de herramientas de seguimiento que permitirán recolectar información sobre la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, con el objetivo de: (1) presentar de forma transparente a la ciudadanía los esfuerzos y logros obtenidos por las entidades a cargo de la implementación, así como, (2) presentar los resultados obtenidos como consecuencia de los esfuerzos del accionar estatal en términos de cambios en el bienestar de las PcD.

Dentro de los sistemas de seguimiento existentes, toma especial importancia *Sinergia*, parte del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados, del que trata el artículo 343 de la Constitución política de Colombia, reglamentado por el Decreto 1290 de 2014, y a cargo del DNP acorde a la "Ley Orgánica del Plan Desarrollo". *Sinergia*, está estructurado en tres componentes (i) Seguimiento a Metas de Gobierno, (ii) Evaluación de Políticas Públicas, y (iii) Sinergia territorial; los cuales aportan a generar información de calidad para la toma de decisiones, promueven la efectividad de las políticas públicas desde su formulación, y combinadas con herramientas de seguimiento presupuestal abogan por la eficiencia del gasto.

De esta manera los resultados de la PPDIS en armonía con la ley Estatutaria 1618 de 2013 y la Ley 1346 de 2009, serán monitoreados a través de *Sinergia-seguimiento* en su herramienta online a nivel nacional; conforme a lo estipulado en los Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo, podrán ser monitoreados en los sistemas de seguimiento a nivel territorial, los cuales cuentan con el acompañamiento técnico y asesoría permanente de *Sinergia-territorial*. Igualmente, conforme a la implementación de los lineamientos

expuestos en este documento, se hará una investigación sistemática y objetiva a diferentes eslabones de la cadena de valor de la política a través de *evaluaciones* con el objetivo de diagnosticar y mejorar los resultados, el diseño, o la implementación de cada uno de los componentes de la política².

Una vez procedan las evaluaciones en los marcos de tiempo establecidos, estaremos dando a conocer los resultados e informes derivados de las mismas. Serán tenidos en cuenta también como instrumentos de evaluación, las retroalimentaciones que el Comité de Seguimiento a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación hacia los derechos humanos – CEDDIS y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU”.

Atentamente,


ENRIQUE BORDA VILLEGAS

Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección

Elaboró/Proyectó: JMolina
Revisó: GCano

C:\Users\jmolina\Documents\J MOLINA\RESPUESTAS D. DE PETICIÓN VRL\2015

² La agenda de evaluaciones se construye para cada vigencia fiscal y está sujeta a las necesidades identificadas por las direcciones técnicas del DNP y cada una de las cabezas sectoriales.